

ANÁLISIS DE COYUNTURA
Febrero 2023



PROLETARIA

Revista de debate y formación

Producción y edición: *PRAXIS- Centro de Pensamiento y Teoría Crítica*

Diagramación: *Trochando Sin Fronteras*



Análisis de coyuntura

El 2023 se abre con una marcada posibilidad a la recesión económica y a la profundización de las pugnas inter-imperialistas

Lo primero que hay que considerar es que los costos de las medidas aplicadas para controlar la crisis de 2019 aún se están pagando, debido a la amplísima emisión de dinero y deuda que realizaron los Estados para sostener al capitalismo. Así, según el IFI (instituto de finanzas internacionales) la deuda mundial llegó a 255 billones de dólares, 342% del PIB global para 2020, y como resultado se viene empeorando el panorama económico mundial. Seguido de esto, los ingentes recursos que se utilizaron para sostener las empresas y controlar la población están trayendo como consecuencia un choque de la oferta, la ruptura de las cadenas de suministro y una rampante inflación.

Esta situación está precipitando al mundo hacia otra recesión, si es que no está ya en ella: se trata de una nueva contracción tras las de 2019, 2008 y 2002. Esta tendencia muestra una recurrencia más sistemática de las crisis, de modo que ha transcurrido menos tiempo desde su antecesora. Para el FMI solamente una tercera parte de las economías del mundo entrarán en recesión, así lo estimó su directora Kristalina Georgieva, que dice que por lo menos la mitad de la Unión Europea vivirá esta situación, así como China, que arrastrada por las consecuencias de sus severos cierres por COVID 19, el colapso de su sector inmobiliario y la caída del consumo interno del gigante asiático, es otra de las candidatas a tener una situación de menor crecimiento en su economía.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se mantiene y profundiza la agenda de guerra. El gasto militar mundial había aumentado considerablemente en 2021, ya antes de la confrontación en Ucrania. Este rubro alcanzó los 2 billones de dólares -un máximo en su historia-, y la mayoría de este gasto se ha dado en Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia, que representa el 62% del mismo. Esta situación abre la posibilidad a un rearme en los casos de Alemania y Japón, que vienen siguiendo la directriz de la OTAN de invertir el 2% de sus PIB en seguridad y defensa.

Por último, las manifestaciones tempranas de la crisis tienen una afectación directa sobre las condiciones de vida de los trabajadores, en la medida que la inflación castiga sus ingresos. Según la OIT solamente en el primer semestre de 2022, el salario real a nivel mundial disminuyó 0.9 %, siendo la primera vez en lo que va corrido del siglo que el crecimiento del salario real ha sido negativo. Esto ha recibido una respuesta popular a través de grandes manifestaciones en Reino Unido por salarios, en Francia ante la amenaza de las pensiones, en España por la creciente privatización de la salud y en China e Irán por el aumento del autoritarismo.

América Latina ante la crisis simultanea de los ciclos neoliberal y progresista

América Latina lejos de afianzarse en alguno de los bloques de gobierno (progresista o derecha) que sucesivamente llegan a la presidencia de estos países, continúa la tendencia a la desestabilización. Esto se observa en la situación de Perú, donde siendo el gobierno de Castillo uno de los que abría la nueva ola progresista en América Latina, entra prontamente en una crisis de gobernabilidad que terminó con su salida del poder, luego de un pulso que intentó llevar con el Congreso. Así mismo, Dina Boluarte, presidenta interina, no ha podido estabilizar el país que lleva cerca de 60 días en intensas movilizaciones que exigen una nueva constitución y la salida del actual gobierno de facto.

En Brasil la estrecha victoria de Lula frente a Bolsonaro obliga al nuevo presidente a gobernar con cautela para evitar las estocadas golpistas de

la ultraderecha, por este motivo creer que tendrá un país tranquilo donde retomar el ejercicio que los gobiernos progresistas llevaban en su país, es una ilusión. Luego del asalto a Brasilia por parte de las hordas bolsonaritas, a Luis Ignacio le ha tocado apertrecharse en las instituciones democráticas y cuidarse de las fuerzas armadas, la banca central y los poderes mafiosos que operan la deforestación de la Amazonia, todos con una clara inclinación hacia Bolsonaro.

Esta situación no es más que la pugna entre el sector liberal reformista y la ultraderecha latinoamericana, que continúan sin plantear una salida consistente a la crisis que se vive en el continente, lo que se ha agudizado en los últimos años, con el ritmo de los precios de las materias primas, los cierres producto del COVID 19 y el desempleo estructural que impacta en las principales zonas urbanas de la región. La poca estabilidad de las condiciones crea periódicas crisis de gobernabilidad, atizadas con estallidos sociales, que obligan a cambios de gobierno y a replanteamientos que retornan al mismo círculo vicioso de la crisis.

Lo preocupante es que no se despunta una izquierda alternativa que tome la iniciativa de asumir las riendas del poder en América Latina y que supere la estrecha conducción de la situación del continente y de la crisis que reproducen los gobiernos progresistas. Éste es el gran problema. La inmersión de la izquierda en la lógica de los movimientos sociales la alejó de perspectivas políticas de carácter estratégico, quedando subordinada a la mediación de partidos de carácter liberal, reformista o burgués.

En Colombia las tímidas reformas del gobierno no logran despuntar.

En Colombia se mantiene el peso de la larga crisis social que inició su ciclo con las afectaciones y consecuencias de la pandemia en 2020. La creciente inflación de productos importados y de los bienes alimentarios nacionales - estos últimos afectados en sus costes por las fuertes lluvias de principio de año que dejaron incomunicada a parte de la región sur occidente del país- ha afectado el ingreso de los y las trabajadoras, generando malestar entre

las mayorías populares. Lo anterior y otras situaciones críticas, han venido probando la capacidad de respuesta del gobierno Petro, que ha podido salir airoso con la aplicación de algunas salidas negociadas, de un lado con las masas populares que protestan por acceder a soluciones, y del otro con los oportunistas de los partidos políticos, a pesar de la presión mediática y las condenas lanzadas por la oposición.

La naturaleza de las reformas del gobierno Petro es apostarle a una transición que le permita ir de un tipo de capitalismo a otro. Pero en la práctica, esta perspectiva se limita a reformas menores, que ni siquiera cuestionan el ordenamiento institucional creado por las políticas neoliberales. Ejemplo de ello es la reforma laboral que se reduce a recuperar la legislación anterior a 2002 (horas extras, contratación parcial), o la reforma pensional que solo busca trasladar una porción de los cotizantes al asegurador público de Colpensiones, esto con el fin de cubrir parte del gasto anual del presupuesto, liberando recursos para gasto corriente, y dejando de lado debates centrales como el hecho de que el 60% de la población ocupada lo hace de manera informal por lo cual no se pensionará.

La reforma a la salud parece que no afectará el esquema financiero de las EPS. Sin embargo, a pesar de lo somera de las propuestas, la reacción de la oposición y el deslinde de los sectores liberales y tradicionales dentro de la coalición de gobierno demuestran la resistencia del bloque hegemónico a cualquier cambio en el país, por más pequeño que éste sea. Además el problema es que estos aspectos sólo atañen a los trabajadores formales, de modo que para el 60% de la población sumergida en la informalidad poco hay propuesto, y esto sólo se puede enfrentar con *cambios sustantivos en la estructura productiva*, algo que aparece mucho en los discursos presidenciales, pero poco en la práctica de gobierno.

Por lo demás, estas reformas menores serán duramente recortadas durante la marcha de su discusión. La negociación con partidos y fracciones del capital (gremios) achatará las iniciativas, que luego serán más recortadas en el Congreso durante sus debates. El realismo de la política de conciliación mostrada por Petro inhibe la misma acción por la mínima reforma. Sin embargo, en las últimas semanas el gobierno ha tensionado la búsqueda de estos consensos, resistiéndose a cambiar el sentido de estas reformas u orientando el sentido que puede tomar el país en materia de infraestructuras como el metro de Bogotá, las carreteras 5G o la política minero energética.

La guía del gobierno, que será sin duda el Plan Nacional de Desarrollo-Colombia potencia mundial de la vida, no asume los debates claves como iniciativas para generar los cambios. Se plantea por ejemplo, la transformación de la matriz energética sobre las bases del capital, *dejando en sus manos la decisión de hacia dónde va la inversión*, con lo cual mantiene intacto su poder para direccionar la sociedad.

Lo que se observa es la profundización de la polarización económica del país al proponerse en el PND dos economías: la popular- para amortiguar las deplorables condiciones de vida de algunos sectores, no proponiendo la superación del pauperismo al que está sometido el proletariado sobrante- y la del gran capital -al que sólo se le ha colocado un impuesto nimio, para que siga con sus rentables actividades, sin que socialice uno solo de sus beneficios.

Por esto cabe recordar que: el direccionamiento estratégico del país depende de hacia dónde fluyen los recursos de inversión, aspecto substancial que no puede ser considerado de forma abstracta o gaseosa, porque la inversión es un delimitador real para valorar si el país está siendo enrumbando hacia una perspectiva que le permita recuperar la capacidad de dirección y control, y la misma sociedad pueda decidir para dónde y cómo quiera ir.

Así, la ambiciosa agenda legislativa desgastará la capacidad de gobernabilidad, al enfrentarlo con varios sectores que se oponen a las reformas. Las iniciativas en materia política, de justicia, plan de desarrollo, adición presupuestal, salud, pensiones, laboral, agraria, pasarán un duro trámite en el Congreso y la opinión pública. Se trata de batallas contra muchos sectores del capital y del poder –que por demás juzga como cosa propia cada fracción de mercado dominado- de modo que esto quebrantará las alianzas que están fuera del Pacto. A ello se suma la débil unidad interna del Pacto, sus disonancias, y las incapacidades propias.

¿Hasta dónde puede llegar tal desgaste? Probablemente hasta comprometer la estabilidad del gobierno. Esto ayuda a explicar los llamados a la movilización y al respaldo popular de las reformas, anunciados por el primer mandatario, de los que saltan dudas que estén tomando forma real a pesar de la popularidad que sigue teniendo el gobierno en los ciudadanos de a pie, que coinciden en que es necesario darle tiempo de que presente sus iniciativas. Este tiempo de que habla la gente, está por el momento a favor

de Petro que podría contar con cierta tranquilidad social en el corto plazo, más no con una tranquilidad política.

El oportunismo electoral también puede afectar la unidad del Pacto, en la medida que la composición de las listas y candidaturas para las elecciones territoriales demuestra la existencia de grandes tensiones y pugnas entre las fuerzas de esta coalición. Si el resultado de octubre no es bueno, es potencialmente previsible una tendencia hacia la desconfianza, la dispersión, seguida de una eventual crisis de gobierno. En tal escenario, ¿hacia dónde virará la “voluntad popular”? ¿Qué hará el movimiento social? Tal hilo no se deja a la suerte, por esto el gobierno trata de fortalecer su relación con el movimiento social, quien le puede garantizar el control de fuerzas sociales que lo estabilicen.

En resumen, la agenda del gobierno Petro es por la institucionalización de la conflictividad social a partir de darle discusión a las demandas populares por vía del Congreso. La competencia electoral de octubre será vital para el futuro de estas aspiraciones, por eso el gobierno prevé que la movilización de tipo ciudadano deberá ser una garantía que acompañe la marcha y el ritmo que marca el gobierno. La pregunta que surge es: ¿será esto sostenible?

Lo cierto es que al momento se mantiene la tendencia a las protestas locales y sectoriales: no más en el mes de enero del presente año, se *realizaron 81 bloqueos en las carreteras del país, 2.6 bloqueos por día*. Estas manifestaciones buscan que el gobierno adjudique recursos en cada caso –y en lo posible los asigne en el Plan Nacional de Desarrollo- por tanto, su mirada política es meramente reivindicativa, no transformadora.

El incremento de protestas parece no sólo responder a la identificación de necesidades y la oportunidad de que se reconozcan en los presupuestos. También podrían estar obedeciendo a que sectores de la ultraderecha alientan la movilización social en procura de ir saturando y desgastando la capacidad de respuesta del gobierno, vía por la que intentan: reconstruir sus vínculos con la población, su posición en las urnas, o crear condiciones para alzamientos de mayor envergadura. En tal sentido, la ultraderecha del país actúa como lo han hecho las de otros países –Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia- que identifican problemas reales y sobre ellos movilizan grandes sectores de masas en contra del gobierno reformista, con el fin de

imposibilitarlo o tumbarlo. Esto significa que la ultraderecha se convierte en un agitador –a veces el principal- de los conflictos sociales, pero reduciéndolos a la dimensión de la gobernabilidad, por tanto, sacando del escenario al capital y limpiándole sus responsabilidades. Fue ésta la estrategia usada por los fascismos en Italia y Alemania, conteniendo claramente elementos de populismo de derecha. En tal escenario, la respuesta de las “izquierdas”, en especial las que se tornan oficialistas, ha sido denigrar, desconocer y hasta chocar contra las masas movilizadas, alegando su supuesta ilegitimidad y manipulación, resaltando sólo el lado manipulador de la derecha, pero desconociendo las bases reales de los problemas, que, insistamos, provienen por lo general de la acción del capital, asunto evidente en el país, dónde la precaria estructura se manifiesta en sistemas de carreteras, educación, o salud más que deficientes y con tremendos déficits. En tal sentido, desde una perspectiva de clase popular corresponde apoyar todas las protestas sociales que reclamen mejores condiciones de vida, y en medio de ellas señalar que tales faltantes provienen de la acción nefasta del gran capital, y que, por tanto, si bien hay que exigirle compromisos y resultados al gobierno, tales demandas resultan imposibles sin entrar a tocar al capital, esto, para que de un lado pague la crisis mediante mejores salarios y mayores impuestos, pero también devolviéndole a la sociedad aquellos recursos y espacios que le rapó en áreas tan sentidas como: vías, transporte público, vivienda, urbanismo, salud, pensiones, educación, tierras y agricultura, y recursos minero-energéticos.

Propugnar por **la salida popular a la crisis** debe ser la consigna de una izquierda verdaderamente transformadora que profundice los cambios. En este sentido la dinámica debe girar más en desarrollar aspectos programáticos que lideren la movilización social y no tanto una participación en abstracto de la sociedad. La larga crisis social que reventó entre 2019 y 2021, creó unas demandas, que se leen como exigencias de cambios sustantivos a la realidad del país. Ello exige, cuando menos, modificar la estructura socio productiva heredada, que por demás se cae a pedazos. Es aquí donde programáticamente no se trata de superar las políticas neoliberales, sino de encaminar al país hacia otra forma de hacer las cosas.

Retomar y profundizar la agenda política de transformaciones sustantivas y la constitución de una fuerza social capaz de llevarlas adelante; ésta es la tarea del movimiento social y popular para el momento.

**Ó GANA
EL PROLETARIADO
Ó PIERDE
LA HUMANIDAD**



mate
amargo

PKC BVS



98

**CLASS
WARS**